



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0323/14

Referencia: Expediente núm. TC-04-2013-0049, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, incoado por el señor Domingo Enrique Martínez Reyes contra la Sentencia núm. 355, dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia el veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Khoury, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución; 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

Sentencia TC/0323/14. Expediente núm. TC-04-2013-0049, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, incoado por el señor Domingo Enrique Martínez Reyes contra la Sentencia núm. 355, dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia el veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Descripción de la sentencia recurrida

La Sentencia núm. 355, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia el veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012). Dicha decisión casó la Sentencia núm. 83-2010, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el doce (12) de febrero de dos mil diez (2010), expresando en su parte dispositiva lo siguiente:

Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Víctor Julio Corporán, Héctor Vinicio Pineda, Gregorio Rodríguez, Ana María Pierrot Coplín, Cándido Rosario Castillo, Iris Nancy Altagracia Castro del Rosario, Andrés Astacio, Dennis Guerrero Ávila, Adriano Lache Belén, Juan Julio de la Cruz, Elsa Milagros de León Vargas, José Altagracia Florentino Tapia, Santo Julio Ramón y Juan Julio Cedeño del Rosario, contra la sentencia núm. 83-2010 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 12 de febrero del 2010, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta decisión; Segundo: Casa la referida sentencia y ordena el envío del proceso por ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, a los fines de conocer nuevamente el asunto; Tercero: Se compensan las costas.

En el expediente no figura ningún documento que haga constar que la sentencia hoy recurrida fuese notificada al señor Domingo Enrique Martínez Reyes.

2. Presentación del recurso



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El recurso de revisión contra la referida sentencia fue interpuesto por el señor Domingo Enrique Martínez Reyes mediante escrito depositado en la Suprema Corte de Justicia, en fecha quince (15) de marzo de dos mil trece (2013) y tramitado al Tribunal Constitucional, en fecha diez (10) de junio de dos mil trece (2013). Dicho recurso fue notificado a las partes recurridas, señores Víctor Julio Corporán, Héctor Vinicio Pineda, Gregorio Rodríguez, Ana María Pierrot Coplín, Cándido Rosario Castillo, Iris Nancy Altagracia Castro del Rosario, Andrés Astacio, Dennis Guerrero Ávila, Adriano Lache Belén, Juan Julio de la Cruz, Elsa Milagros de León Vargas, José Altagracia Florentino Tapia, Santo Julio Ramón y Juan Julio Cedeño del Rosario, mediante el Acto núm. 03/2013, de fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013), instrumentado por el ministerial Darío Antonio Tobal Miguel, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia.

3. Fundamentos de la sentencia recurrida

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia acogió el recurso de casación, fundamentándose en los siguientes motivos:

- a. *Considerando, que en la especie se trata de un conflicto suscitado entre propietarios, en virtud del cual unos, provistos de un certificado de títulos sostiene que los otros, quienes fueron puestos en posesión de unos terrenos del Instituto Agrario Dominicano, le están invadiendo su propiedad, el cual fue resuelto por el juez a-quo declarando la absolución de los imputados por haberse comprobado que éstos no cometieron ningún ilícito de tipo penal ni civil, y ante el recurso de apelación de la Corte a-qua declara su incompetencia, por considerar que es un asunto de la competencia de la Jurisdicción Inmobiliaria, según refieren las motivaciones ofrecidas por ésta; que a entender de la referida Corte es la*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

jurisdicción que debe dirimir la referida confrontación, ya que deben ordenarse una serie de medidas periciales para determinar de quien es el sitio exacto ocupado por las partes.

b. Considerando, que los recurrentes esgrimen en sus tres medios, los cuales se analizan conjuntamente por su estrecha relación, que la Corte A-qua no debió declararse incompetente, porque el presente caso es un conflicto entre los parceleros asentados legalmente por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), en virtud de la Ley de Reforma Agraria no entre el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y el Instituto Agrario Dominicano (IAD); que se evidencia una notable desnaturalización y mala interpretación de los hechos, ya que conforme la Certificación del Registrador de Títulos de San Pedro de Macorís, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) es copropietario de la Parcela 27, conjuntamente con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA); que los derechos que ostentan los recurrentes están amparados por la Ley 5869 de Reforma Agraria, y en tal sentido para el conocimiento de conflictos relacionados con los predios otorgados por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) la competencia es de los tribunales ordinarios.

c. Considerando, que ciertamente, de conformidad con lo sostenido por los recurrentes, la Corte a-qua es competente para reconocer de la infracción de la cual fue apoderada (violación de propiedad), ya que cuando un tribunal penal es apoderado para juzgar un comportamiento donde se alega que el mismo constituye una infracción, luego de analizar y ponderar los hechos, debe pronunciarse sobre los mismos, admitiendo o no la culpabilidad de o de los procesados, pero no



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

puede declarar su incompetencia, debiendo, en caso de no encontrar elementos para retener responsabilidad penal, descargar o rechazar la acción incoada por estimar que el caso sometido a su consideración no constituye una infracción penal o en caso contrario ordenar las medias a su alcance para esclarecer los hechos.

d. Considerando, que en la especie no existen varios Certificados de Títulos en conflictos, en cuyo caso si hubiera procedido enviar el caso al Tribunal de Tierras, sino un Certificado de Título, marcado no el núm. 70-1, expedido por el Registrador de Títulos de San Pedro de Macorís el 1ro. de febrero de 1960, donde se establece que la Parcela núm 27 resto del Distrito Catastral 2/4 del municipio de La Romana, es propiedad de Azucarera Haina, C. por A., hoy Concejo Estatal del Azúcar (CEA), terrenos donde el Instituto Agrario Dominicano (IAD), realizó el asentamiento de las partes envueltas en la presente controversia; por lo cual procede casar la sentencia.

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión

Mediante su escrito introductorio de Recurso de Revisión Constitucional, de fecha quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), el señor Domingo Enrique Martínez Reyes sostiene que con la Sentencia núm. 355-12, dictada por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, le fueron violados sus derechos de acceso a la justicia (alega que no se le notificó el recurso de casación ni el contenido de la sentencia que lo resuelve, por lo que se violan los numerales 1 y 10 del artículo 69 de la Constitución), sostiene que por la referida ausencia de notificación, se violó su derecho a ser oído, y por lo tanto, se transgredieron los numerales 1 y 2 del artículo 69, al debido proceso de ley (los mismos



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

argumentos de falta de notificación), así como a los principios de igualdad y contradicción, también basándose en la misma situación fáctica, aduciendo esta vez que se infringe el numeral 4 del artículo 69 de la Constitución.

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión

Por medio de su escrito de defensa, depositado el nueve (9) de mayo de dos mil trece (2013), los señores Víctor Julio Corporán y compartes sostienen, entre otros argumentos, lo siguiente:

a. *Que el imputado de violación de propiedad, Domingo Enrique Martínez reyes como motivo de su acción en Revisión Constitucional ha enarbolado la teoría de que nunca tubo (sic) conocimiento de la existencia de ese Recurso de Casación, cosa que no es cierto pues si se enteró ya que le fue notificado por el Tribunal A-qua, sin embargo al entender este que no necesitaba defenderse por tener, según él amigos en la Suprema Corte de Justicia, pensó que no era necesario defenderse y no lo hizo.*

b. *Pero que además Domingo Enrique Martínez cita el hecho de que no fue citado a la audiencia ante la suprema corte de justicia (sic) para conocer sobre el recurso de Casación, hecho este que no tiene ninguna relevancia ya estamos en igualdad de condiciones pues nosotros tampoco nos enteramos de dicha audiencia ni tampoco comparecimos (sic).*

c. *No es posible que un expediente sobre un Recurso de Casación se le de curso ante la Suprema Corte de Justicia sin que se haya cumplido con el requisito de la notificación del recurso de casación, pues son cientos de expedientes que la suprema corte de justicia (sic) tiene parado (sic) por dejar de cumplir con este requisito y que en el caso de la especie fue cumplido.*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

d. *En síntesis el accionante solo se ha limitado a señalar las supuestas violaciones en varios lugares de sus escritos y repetir en infinidades de ocasiones los textos legales violados como con la intención de impresionar o subestimar la inteligencia de los juzgadores, sin embargo en cuatro líneas resumieron el contenido total de las supuestas violaciones que fue el hecho de no haberse enterado del recurso de casación ni tampoco del día de la audiencia que se conoció para dicho recurso, motivos por lo que dicho recurso debe ser rechazado.*

6. Opinión del Procurador General de la República

En ocasión del presente recurso de revisión, el Procurador General Adjunto de la República emitió su opinión mediante escrito depositado ante la Suprema Corte de Justicia, en fecha quince (15) de abril de dos mil trece (2013), y solicita el rechazo del recurso, fundamentándose en los siguientes argumentos:

a. *En la especie, tal y como se aprecia en el dispositivo de la sentencia recurrida en revisión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del recurso de casación interpuesto contra la sentencia No. 83/2010 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís en 17 de octubre de 2012, declaró con lugar el recurso de casación, casó la sentencia recurrida y ordenó el envío del proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, a los fines de conocer nuevamente del asunto.*

b. *En esa virtud, con total independencia de los alegatos concernientes al fondo del recurso de revisión constitucional analizado, se configura una situación procesal que colide con los presupuestos establecidos por los arts. 277 de la Constitución y 53 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procedimientos Constitucionales, en atención a los cuales la admisión de un recurso de revisión contra una sentencia o decisión judicial emanada de un tribunal de la República está condicionada a que la misma haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, lo que no ha ocurrido en la especie, conforme se desprende de lo decidido en la sentencia impugnada.

*c. Por tales motivos y sin necesidad de ponderar ningún otro elemento, somos de opinión: **Único:** Que procede rechazar, con todas sus consecuencias, el recurso de revisión constitucional interpuesto por Domingo Enrique Martínez Reyes, contra la Sentencia No. 355 dictada en fecha 17 de octubre de 2012 por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.*

7. Pruebas documentales

En el trámite del presente recurso, la prueba documental que obra en el expediente es la siguiente:

1. Acto núm. 03/2013, de fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013), instrumentado por el ministerial Darío Antonio Miguel Tobal Miguel, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia. (Contentivo de la notificación del recurso de revisión constitucional a las partes recurridas).

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8. Síntesis del conflicto

Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el presente caso se origina en un conflicto suscitado entre propietarios, en virtud del cual uno de ellos sostiene que los otros le



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

están invadiendo su propiedad. En primer grado, se declaró la absolución de los imputados por haberse comprobado que éstos no cometieron ningún ilícito de tipo penal ni civil, y en la etapa de apelación, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís declaró su incompetencia, mediante la Sentencia núm. 83-2010, de fecha doce (12) de febrero de dos mil diez (2010), por considerar que era un asunto de la competencia de la Jurisdicción Inmobiliaria.

No conforme con dicha decisión, la parte hoy recurrida recurrió tal sentencia en casación, dictando la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012), la Sentencia núm. 355, casando la sentencia impugnada y ordenando el envío del proceso por ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, a los fines de conocer nuevamente el asunto. Contra este último fallo, y mediante su escrito, de fecha quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), el señor Domingo Enrique Martínez Reyes recurre en revisión constitucional.

9. Competencia

Este tribunal es competente para conocer de las acciones directas en inconstitucionalidad, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y los artículos 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011).

10. Inadmisibilidad de la acción

El Tribunal entiende que el presente recurso es inadmisibile, en virtud del siguiente razonamiento:



República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

- a. El artículo 277 de la Constitución consagra que todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada hasta el momento de la proclamación de la Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia.
- b. En ese sentido, el artículo 53 de la referida ley núm.137-11, faculta a este Tribunal para conocer de las revisiones de las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), fecha en la que fue promulgada la Constitución.
- c. Lo anterior implica que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se interpone contra sentencias firmes, que han adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que ponen fin a cualquier tipo de acción judicial relativa al mismo objeto y con las mismas partes, y contra las cuales no es posible interponer ningún otro recurso ordinario o extraordinario, ya que de lo contrario, es decir, cuando la sentencia atacada tiene abiertas las vías recursivas por ante los tribunales ordinarios, el recurso deviene inadmisibile (Sentencia TC/0091/12 del 20 de diciembre de 2012. Dicho criterio del Tribunal ha sido reafirmado en las sentencias TC/0051/13 y TC/0053/13, ambas de fecha 9 de abril del año 2013).
- d. El Tribunal Constitucional ha podido comprobar que el señor Domingo Enrique Martínez Reyes ha incoado un recurso de revisión de decisión jurisdiccional en contra de la referida sentencia núm. 355, de fecha veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012), la cual no pone fin al proceso en cuestión, sino que casa con envío la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el doce (12) de febrero de dos mil diez (2010).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

e. De lo anterior resulta que la Corte de envío -es decir, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo- deberá resolver la cuestión que no ha sido definitiva e irrevocablemente juzgada, lo que torna al presente recurso inadmisibile.

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley.

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional,

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisibile el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, incoado por Domingo Enrique Martínez Reyes contra la Sentencia núm. 355, dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia el veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012=, , por no cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, respecto a la admisibilidad de los recursos de revisión constitucional de sentencia judicial.

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Domingo Enrique Martínez Reyes; y a la parte recurrida, señores Víctor Julio Corporán, Héctor Vinicio Pineda, Gregorio Rodríguez, Ana María Pierrot Coplín, Cándido Rosario Castillo, Iris Nancy Altagracia Castro del Rosario, Andrés Astacio, Dennis Guerrero Ávila, Adriano Lache Belén, Juan Julio de la Cruz,



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Elsa Milagros de León Vargas, José Altagracia Florentino Tapia, Santo Julio Ramón y Juan Julio Cedeño del Rosario.

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional, y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011)

CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Samuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico.

Julio José Rojas Báez
Secretario